

**SECRETARIOS DE LA COMISIÓN DE  
DESARROLLO SOCIAL Y ASISTENCIA PÚBLICA  
P R E S E N T E.-**

Les saludos cordialmente y aprovecho para extenderles atenta invitación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 88 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, a una reunión no presencial (virtual) de la Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública, que habrá de celebrarse el día **martes 24 de noviembre del año en curso, a las 17:00 horas**, bajo el siguiente orden del día:

I.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

II.- Lectura y aprobación del orden del día.

III.- Análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa de la diputada Ma. Magdalena Uribe Peña, con proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora.

IV.- Análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa de la diputada Diana Platt Salazar, con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 5 de junio que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Sonora.

V.- Análisis, discusión y, en su caso, dictaminación de la iniciativa de la diputada Marcia Lorena Camarena Moncada, con proyecto de Ley que Regula la Operación de Albergues del Estado de Sonora.

VI.- Clausura de la reunión.

Sin otro particular por el momento y en espera de contar con su puntual asistencia, le reitero la seguridad de mi consideración y respeto.

**ATENTAMENTE**

Hermosillo, Sonora a 20 de noviembre de 2020.

**C. DIP. MIROSLAVA LUJÁN LÓPEZ  
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
Y ASISTENCIA PÚBLICA**

**COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL  
Y ASISTENCIA PÚBLICA**

**DIPUTADOS INTEGRANTES:**

**MIROSLAVA LUJÁN LÓPEZ**

**GRISELDA LORENA SOTO ALMADA**

**YUMIKO YERANIA PALOMAREZ HERRERA**

**FRANCISCO JAVIER DUARTE FLORES**

**ROGELIO MANUEL DIAZ BROWN RAMSBURGH**

**ORLANDO SALIDO RIVERA**

**MIGUEL ANGEL CHAIRA ORTIZ**

**HONORABLE ASAMBLEA:**

A los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública de esta Sexagésima Segunda Legislatura, nos fue turnado para estudio y dictamen por la Presidencia de éste Poder Legislativo, escrito presentado por la Diputada María Magdalena Uribe Peña, el cual contiene **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA.**

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 92, 94, fracciones I y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al tenor de la siguiente:

**PARTE EXPOSITIVA:**

La iniciativa de mérito, fue presentada el día 03 de octubre del 2019, con sustento en los siguientes argumentos:

*“Como legisladora, es para mí fundamental poder generar las condiciones para que toda la población tenga las mismas oportunidades, por ello me preocupa la situación de los grupos vulnerables de la sociedad.*

*En muchos de los programas enfocados en general a grupos vulnerables, realmente no se les considera esta situación vulnerable en lo específico, con respecto a las demás personas.*

*Dicha situación, vulneran sus derechos humanos, los cuales son la parte fundamental de la vida colectiva como sociedad.*

*Los grupos vulnerables, por sus condiciones socioculturales, de salud, origen étnico, género, discapacidad y otros, viven una realidad de mayor impedimento.<sup>1</sup>*

*Las clasificaciones de grupos vulnerables, entre otras, son las siguientes:*

- *Personas con discapacidad.*
- *Mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia.*
- *Adolescentes embarazadas.*
- *Personas adultos mayores*

*A manera de ejemplo, para explicar el fundamento de mi Iniciativa, voy a destacar el tema de las personas adultos mayores, que en lo que corresponde a nuestra entidad federativa.*

*En efecto, en materia de cobertura a los programas destinados a las personas adultos mayores, es imperante facilitar el acceso a nuestros Adultos Mayores, para alcanzar la meta de cobertura estimada por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Sonora.*

*Aquí tenemos una situación de oportunidad, para mejorar esta cobertura:*

*Las reglas de operación de los programas de desarrollo social, implican requisitos como acudir a las oficinas, presentar documentación que ya se ha presentado, volver a llenar formularios, incluso por vía internet, entre muchos más requisitos.*

*Con estos requisitos, aparentemente sencillos para cualquier persona, para cada grupo vulnerable de la sociedad si es una complicación reunirlos fácilmente.*

*A muchas personas adultos mayores, precisamente por su edad no pueden movilizarse mucho, están solos, no pueden llenar fácilmente los formularios por escrito, iguales complicaciones tienen con requisitos por la vía de las tecnologías.*

*No omito aclarar, que, en la práctica, los servidores públicos responsables y competentes, son sensibles a que estos requisitos muchas veces les complican el acceso a personas vulnerables y otorgan cierta flexibilidad.*

*Por lo anterior, encuentro preocupante la situación en la que estamos sumergidos como ciudadanos y como sociedad, y está en nuestras manos tratar de erradicar dichas carencias sociales y apoyar a los grupos vulnerables.*

*Apegándonos al principio de la competencia, no está en nuestras manos la operación de los programas; sin embargo, tenemos herramientas legislativas, las cuales hay que explotar en*

---

<sup>1</sup> Véase: Los Derechos Humanos, los Grupos Vulnerables y el ISSSTE. Disponible en: <https://www.gob.mx/issste/articulos/los-derechos-humanos-los-grupos-vulnerables-y-el-issste?idiom=es>

*aras de generar mejoras en nuestra sociedad, con la finalidad fortalecer a los grupos vulnerables.*

*Es para mí de especial atención generar las condiciones para que las personas vulnerables o grupos vulnerables, con base a modificaciones a la normatividad, pueden tener acceso fácil, sencillo, y que las instituciones garanticen dicho acceso por medio de la ley, atendiendo a la calidad del beneficiario como parte de un grupo vulnerable de la sociedad.*

*Efectivamente, que por Ley, el Gobierno tenga la obligación de establecer en las reglas de operación de los programas, esa flexibilidad de brindar fácil acceso a personas con calidades específicas vulnerables.*

*Es fundamental establecer normas que permitan a los grupos en comento, poder hacer a un lado el obstáculo de requisitos que impiden su acceso, formalidades que les complican su inclusión, producto de su condición de vulnerabilidad.*

*En efecto, las reglas de operación de los programas sociales, no son sensibles a las condiciones del grupo vulnerable beneficiario del mismo; es decir, no toman en consideración la situación específica de las personas vulnerables a las que va dirigido.*

*En aras de generar más claridad en la propuesta que hoy traigo ante ustedes, reitero lo que propongo:*

*Reglas de operación que garanticen el fácil acceso a los grupos vulnerables de la sociedad a los programas correspondientes, con la convicción de que será suficiente para asegurar un acceso más amplio a los diversos programas sociales de cualquier orden de gobierno, atendiendo a la calidad vulnerable de cada beneficiario.”*

Expuesto lo anterior, esta Comisión procede a resolver el fondo de la iniciativa en estudio, para lo cual nos fundamentamos bajo las siguientes:

### **CONSIDERACIONES:**

**PRIMERA.-** Es facultad constitucional y de orden legal de los Diputados al Congreso del Estado, iniciar ante este Órgano Legislativo las leyes, decretos o acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito jurisdiccional del Estado, atento lo dispuesto por los artículos 53, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

**SEGUNDA.-** Conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de este Poder Legislativo discutir, aprobar y expedir toda clase de

leyes, decretos y acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda resolución que afecte a las personas en general, de decreto la que otorgue derechos o imponga obligaciones a personas determinadas, y de acuerdo en los demás casos, según lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que en la interpretación, reforma o abrogación de leyes, deberán observarse los mismos trámites establecidos para su formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

**TERCERA.-** El Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general de conformidad con el artículo 64, fracción XXXV de la Constitución Política del Estado de Sonora.

**CUARTA.-** En México, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, según lo previsto por el artículo 1º, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, toda persona tiene derecho a participar y a beneficiarse de los programas de desarrollo social, de acuerdo con los principios rectores de la Política de Desarrollo Social, en los términos que establezca la normatividad de cada programa; asimismo, toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su desventaja, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 7º y 8º de la Ley General de Desarrollo Social.

En el ámbito local, en el Estado de Sonora queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra, asimismo, toda persona en el Estado de Sonora tiene derecho a un desarrollo social integral recibiendo los beneficios consecuentes en forma de mejor calidad de vida, lo anterior, con base en lo establecido en los artículos 1º, inciso I), párrafo segundo de la Constitución Política del Estado de Sonora y 2º de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora.

**QUINTA.-** Con relación al concepto de grupos vulnerables, la obra *“Evolución y características de las pobreza en México en la última década del siglo XX”*, publicada en el mes de agosto de 2002, por la Secretaría de Desarrollo Social de la Federación, nos ofrece una definición muy amplia en la que los grupos mencionados son aquellos que, en general, viven en condiciones de pobreza extrema. Las percepciones económicas de las personas en extrema pobreza no les permiten adquirir una cantidad suficiente de alimentos para poder desempeñar sus actividades económicas y sociales satisfactoriamente. En consecuencia, estos ingresos tampoco les alcanzan para atender el resto de sus necesidades básicas como son salud, vivienda y educación.

Por lo tanto, el concepto de grupo vulnerable se aplica a aquellos grupos de la población que por su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico y muchos de los considerados en el párrafo quinto del artículo 1º de la Constitución Política de México, se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar y calidad de vida.

Así pues, a la vulnerabilidad se le ha definido como el resultado de la acumulación de desventajas y una mayor posibilidad de presentar un daño, derivado de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales, pero también de una diferencia de trato social, principalmente en lo económico, pero sin descartar las cuestiones ya mencionadas. Son vulnerables los diversos grupos de la población: las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con

discapacidad, los adultos mayores y la población indígena, que más allá de su pobreza, viven en situaciones de riesgo y de desventaja. Desde la norma asistencial, se le concibe a la vulnerabilidad como un fenómeno de desajustes sociales que ha crecido y se ha arraigado en las sociedades. La acumulación de desventajas es multifactorial y adquiere varias dimensiones, pero la que más destaca es la económica por una mala distribución de la riqueza, pero que a la par se le suma la dimensión cultural. Denota carencia o ausencia de elementos esenciales para la subsistencia y el desarrollo personal, e insuficiencia de las herramientas necesarias para abandonar situaciones en desventaja, estructurales o coyunturales.

Por su parte, la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) define como grupo vulnerable al que padece de inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla. El grado de vulnerabilidad de una persona, un hogar o un grupo de personas está determinado por su exposición a los factores de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas.

No obstante, también desde otras perspectivas se atiende el problema de la vulnerabilidad, por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera una amplia gama de grupos vulnerables que incluye a las mujeres violentadas, refugiados, personas viviendo con VIH/Sida, personas con orientación sexual distinta a la heterosexual e identidad de género, personas con alguna enfermedad mental, personas con discapacidad, migrantes, jornaleros agrícolas, desplazados internos y adultos mayores.

Así pues, la pobreza no sólo define la vulnerabilidad, también la diferencia de trato es fundamental cuando por las causas ya indicadas en líneas anteriores se puede excluir de los derechos humanos o de acceso a mejores condiciones de vida, o de calidad de vida a personas o grupos de personas determinadas.

Estudios del Banco Mundial revelan que la vulnerabilidad de las personas y las familias ante situaciones adversas es intrínseca a la pobreza: Cuando los recursos del hogar no alcanzan para adquirir el valor de la canasta alimentaria, más una

estimación de los gastos necesarios de salud, vestido, calzado, vivienda, transportes y educación.

En tal sentido, es importante mencionar la innegable existencia de diversos programas operativos de apoyo social, implementados por los distintos niveles de gobierno en nuestro país, mismos que requieren de mecanismos adecuados para ser ejecutados y aplicados sus recursos en los grupos de la sociedad, previamente definidos, pudiendo estar destinados para atender problemáticas en materia de vivienda, educación, alimentación, salud, entre otros.

En la especie, la iniciativa que es materia de este dictamen, propone adicionar un párrafo segundo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora, para que los programas operativos de desarrollo social y sus reglas de operación, de las dependencias del gobierno estatal y los municipios sean sensibles a las condiciones de los grupos vulnerables de la sociedad, priorizando y garantizando el fácil acceso de los integrantes de dichos grupos, a los programas que les correspondan de acuerdo a la calidad de vulnerabilidad del solicitante.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Social, consideramos viable y positiva la iniciativa en estudio, recomendando que sea aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo, toda vez que, con su entrada en vigor, se estaría reforzando la parte que tiene que ver con la implementación de las reglas de operación de los programas operativos de desarrollo social, mismas que las autoridades estatales y municipales están obligados a aplicar, dándole un enfoque social y humanitario al tema, al dejar plasmada la prioridad que deben tener los grupos vulnerables de la sociedad en el acceso a los recursos o, dicho de otra manera, a la aplicación de los mismos, en favor de los habitantes que más los necesitan, para que les permitan aspirar a la posibilidad de una mejora en su calidad de vida.

Finalmente, es pertinente señalar que, atendiendo lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios

y el artículo 79, fracción IX de la Constitución Política del Estado de Sonora, mediante oficio número 3503-I/19, de fecha 08 de octubre de 2019, la Presidencia de la Mesa Directiva de este Poder Legislativo tuvo a bien solicitar al Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, la remisión a esta Soberanía, del dictamen de impacto presupuestario de la iniciativa en cuestión. Al efecto, mediante oficio número SH-0830/2020, de fecha 20 de mayo de 2020, el titular de la Secretaría de Hacienda señala lo siguiente al respecto: “...*esta Secretaría de Hacienda no estima que las siguientes iniciativas contengan impacto presupuestal que ponga en riesgo el Balance Presupuestario Sostenible del Gobierno del Estado: Folio 1596-62, Decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora.*”

En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a consideración del pleno el siguiente proyecto de:

### **DECRETO**

#### **QUE ADICIONA UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE SONORA.**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se adiciona un párrafo segundo al artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Sonora, para quedar como sigue:

#### **ARTÍCULO 38.- ...**

Las reglas de operación mencionadas en el párrafo anterior, deben ser sensibles a las condiciones de los grupos vulnerables de la sociedad, por lo que deben de priorizar y garantizar el fácil acceso de los mismos a los programas correspondientes, atendiendo a la calidad vulnerable del beneficiario.

### **TRANSITORIO**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** La Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Sonora tiene un periodo de 60 días para homologar su reglamento acorde a las disposiciones del presente Decreto.

En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se solicita que el presente dictamen sea considerado como obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión.

**SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
"CONSTITUYENTES SONORENSES DE 1917"  
Hermosillo, Sonora, a 25 de noviembre de 2020.**

**C. DIP. MIROSLAVA LUJÁN LÓPEZ**

**C. DIP. GRICELDA LORENA SOTO ALMADA**

**C. DIP. YUMIKO YERANIA PALOMAREZ HERRERA**

**C. DIP. FRANCISCO JAVIER DUARTE FLORES**

**C. DIP. ROGELIO MANUEL DIAZ BROWN RAMSBURGH**

**C. DIP. ORLANDO SALIDO RIVERA**

**C. DIP. MIGUEL ANGEL CHAIRA ORTIZ**

**COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y  
ASISTENCIA PÚBLICA.**

**DIPUTADOS INTEGRANTES:**

**MIROSLAVA LUJÁN LÓPEZ**

**GRICELDA LORENA SOTO ALMADA**

**YUMIKO YERANIA PALOMAREZ HERRERA**

**FRANCISCO JAVIER DUARTE FLORES**

**ROGELIO MANUEL DÍAZ BROWN RAMSBURGH**

**ORLANDO SALIDO RIVERA**

**MIGUEL ÁNGEL CHAIRA ORTÍZ**

**HONORABLE ASAMBLEA:**

A los suscritos, diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública, de esta Sexagésima Segunda Legislatura, nos fue turnado para estudio y dictamen por la Presidencia de este Poder Legislativo, escrito de la Diputada Diana Platt Salazar, mediante el cual presenta ante esta Soberanía, **INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 5 DE JUNIO QUE REGULA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL EN EL ESTADO DE SONORA.**

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 92, 94, fracciones I y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al tenor de la siguiente:

**PARTE EXPOSITIVA:**

La iniciativa, objeto del presente dictamen, fue presentada el día 08 de octubre de 2019, con base en los siguientes argumentos:

*“La lamentable experiencia vivida el 05 de junio de 2009 en la capital del Estado, vino a marcar la vida de miles de familias sonorenses, ante la desgracia generada por el incendio al que fue objeto la guardería ABC, en el cual fallecieron 49 niños, experiencia que no queremos se vuelva a repetir.*

*Lo anterior provocó una serie de reacciones que trascendieron al marco jurídico estatal, a través de reformas a diversas leyes, incluso la aprobación de la Ley 5 de junio que regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Sonora.*

*La Ley 5 de junio que regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Sonora, aprobada y publicada el 18 de julio de 2013, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, tiene por objeto uniformar principios, criterios y estrategias en la prestación de servicios y desarrollo de actividades de los Centros de Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Sonora, adecuando las disposiciones que para tal efecto contempla la Ley General de Prestación de Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral e Infantil, al ámbito local, así como establecer la participación de los sectores privado y social, en materia de prestación de servicios de los Centros de Desarrollo Integral Infantil, garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, seguridad y protección adecuadas que promuevan el ejercicio pleno de sus derechos.*

*De acuerdo al objeto de la referida Ley, se busca que la prestación de servicios que reciban las niñas y niños en los Centros de Desarrollo Integral Infantil sea en condiciones **de seguridad**, hago énfasis en esto, dado a que la propuesta que vengo a plantear en esta iniciativa tiene que ver con ese rubro.*

*El maltrato infantil al que han sido objeto algunas niñas y niños, no es un problema que solamente se da hacia el interior de un seno familiar o escolar, sino que también se han dado increíblemente en las guarderías en las que miles de madres y padres que trabajan se ven en la necesidad de confiar el cuidado de sus pequeños hijos, situación que en ocasiones genera una preocupación más para las familias.*

*En el país se han dado algunos casos en los que niñas y niños han sido objeto de maltrato físico por parte de las personas que trabajan en los Centros de Desarrollo Integral Infantil. El 15 de febrero del año en curso en la guardería Maryelein, ubicada en la Alcaldía de Tláhuac en la ciudad de México, se dio un caso de maltrato infantil en donde algunos niños eran sometidos en cajas de cartón, encerrados en los baños y otros amarrados.*

*Otro caso de maltrato infantil se dio en el mes de junio del año en curso en el Estado de Nuevo León, en la guardería Ikids Estancia y Guardería, en donde una educadora golpea con la cabeza y la mano a una bebé, noticia que trascendió en las redes sociales en todo el país.*

*Sonora no ha sido ajeno a tan lamentables casos, en San Luis Río Colorado en el mes de noviembre del año 2016, una maestra encargada de una guardería, maltrató por varias semanas a un menor de 3 años, a quien de castigo no le daba comida y lo encerraba.*

*Como podemos ver, no podemos esperar a que sucedan más casos de maltrato infantil en una guardería para que hagamos algo para prevenirlo, no podemos esperar a que haya otra desgracia como lo de la guardería ABC para reaccionar, por ello, vengo a proponer como una medida preventiva a que en todos los Centros de Desarrollo Integral Infantil se instalen equipos o sistemas tecnológicos para la captación o grabación de imágenes o sonidos como una medida de seguridad adicional para prevenir cualquier riesgo o emergencia que se presente en las instalaciones, sin vulnerar los derechos de las niñas y niños.*

*Así mismo, propongo que el propietario, encargado o administrador de un Centro de Desarrollo Integral Infantil, que no tenga en funcionamiento los equipos o sistemas tecnológicos a los que se hace alusión en el párrafo anterior, se le aplique una sanción.”*

Expuesto lo anterior, esta Comisión procede a resolver el fondo de la iniciativa en estudio, para lo cual nos fundamentamos bajo las siguientes:

#### **CONSIDERACIONES:**

**PRIMERA.-** Es facultad constitucional y de orden legal de los diputados al Congreso del Estado, iniciar ante este Órgano Legislativo las leyes, decretos o acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito jurisdiccional del Estado, atento lo dispuesto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.

**SEGUNDA.-** Conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de este Poder Legislativo discutir, aprobar y expedir toda clase de leyes, decretos y acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda resolución que afecte a las personas en general, de decreto la que otorgue derechos o imponga obligaciones a personas determinadas, y de acuerdo en los demás casos, según lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que, en la interpretación, reforma o abrogación de leyes, deberán observarse los mismos trámites establecidos para su formación,

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

**TERCERA.-** El Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general de conformidad con el artículo 64, fracción XXXV de la Constitución Política del Estado de Sonora.

**CUARTA.-** La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas, de la que México es parte integrante, y que reconoce los derechos humanos básicos de los niños, niñas y adolescentes. Asimismo, quedaron establecidos en dicha Convención, cuatro principios fundamentales, los cuales son los siguientes:

- 1.- La no discriminación;
- 2.- **El interés superior del niño;**
- 3.- El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y
- 4.- La participación infantil.

Al respecto, en nuestro orden jurídico federal contamos con la protección constitucional para nuestra niñez, en los términos que establece el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo noveno, que a la letra dice: *“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.”*; mientras que, en su párrafo décimo primero, establece: *“El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”*.

Por nuestra parte, en el ámbito local tenemos que la Constitución Política del Estado de Sonora tutela la protección de los derechos de la niñez, estableciendo en su artículo 1º, párrafos octavo, noveno y décimo lo relativo al tema que nos ocupa, en los siguientes términos:

*“Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.*

*Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.*

*El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.”*

De manera congruente, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, en su artículo 1º, define su objeto como *“garantizar el pleno goce, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes”*, estableciendo en el párrafo segundo de ese mismo artículo, la siguiente obligación: *“todas las autoridades locales en el ámbito de sus competencias están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que habiten y/o transiten en el Estado de Sonora. En consecuencia deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a sus derechos humanos en los términos que establece la Ley.*

**QUINTA.-** En la especie, deviene importante destacar que, al tocar el tema de la niñez estamos también tocando una de las fibras más sensibles de nuestra sociedad, por ser uno de los sectores más vulnerables de la población a nivel mundial, por lo tanto, debemos abordar el tema con extrema delicadeza y cuidado.

Como antecedente tenemos que la primera guardería en México surgió en 1837 en la capital del país, con la finalidad de cuidar a los hijos de las madres que trabajaban en el Mercado del Volador, donde actualmente está el zócalo capitalino.

Fue en el año de 1941, durante la administración del Presidente Manuel Ávila Camacho, cuando se creó la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro; siendo en la primera guardería donde se atendía solamente a tres niños, mismos que eran hijos del personal que laboraba en esa institución.

Es así que hasta el año de 1983 se hizo obligatorio que el Estado brindara el servicio de estancias infantiles, por lo cual, un año más tarde, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) tomó el control del referido servicio de diversas dependencias gubernamentales.

Atendiendo el tema central de la iniciativa que es materia del presente dictamen, tenemos que el objeto de la misma consiste en reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley 5 de junio que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Sonora, con el objeto de generar las condiciones de seguridad necesarias en el trato recibido por los infantes que quedan al cuidado y responsabilidad de las guarderías a lo largo y ancho de nuestro estado; esto, a través de la instalación de tecnología audiovisual, que permita detectar posibles malos tratos hacia los menores en comento y, a su vez, se garantice la integridad de los mismos. Asimismo, se pretende dejar establecida una sanción específica en aquellos casos en que se incurra en omisión por parte de los propietarios, encargados o administradores de algún Centro de Desarrollo Integral Infantil, que no tenga en funcionamiento los equipos o sistemas tecnológicos a que hemos hecho referencia.

Lo anterior, debido a que en reiteradas ocasiones se han presentado en distintos puntos geográficos del territorio nacional, casos que han salido a la luz pública y que tiene que ver con abusos cometidos en contra de menores que estaban siendo atendidos en centros de atención y cuidado infantil, lo que ha generado la inquietud de la sociedad, por lo delicado del tema.

Es por todo lo anteriormente expuesto, que los diputados que integramos esta Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública, consideramos que la

iniciativa que es motivo de estudio en este dictamen, contiene una propuesta positiva que recomendamos sea aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo, toda vez que con su entrada en vigor se estarían generando mejores condiciones de seguridad para las niñas y niños que reciben los cuidados y atención que brindan los Centros de Desarrollo Integral Infantil en nuestra entidad federativa.

En conclusión, con fundamento en lo previsto en el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a consideración del Pleno, el siguiente proyecto de:

### **DECRETO**

#### **QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 5 DE JUNIO QUE REGULA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN, CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL INFANTIL EN EL ESTADO DE SONORA.**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforman los artículos 39, fracciones XIII y XIV y 74, fracciones VII y VIII y se adicionan una fracción XV al artículo 39, un artículo 72 Bis y una fracción IX al artículo 74, todos de la Ley 5 de junio que Regula la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Sonora, para quedar como sigue:

#### **ARTÍCULO 39.- ...**

I a la XII.- ...

XIII.- Mantener una matrícula de reserva equivalente al diez por ciento del total de su capacidad, para efecto de cubrir las reubicaciones derivadas de la sanción a la que se refiere el artículo 74 de esta Ley;

XIV.- Instalar equipos o sistemas tecnológicos para la captación o grabación de imágenes o sonidos como una medida de seguridad adicional para prevenir cualquier riesgo o emergencia que se presente en las instalaciones, sin vulnerar los derechos de las niñas y niños consagrados en la legislación vigente.

El propietario, encargado o administrador de un Centro de Desarrollo Integral Infantil, que no tenga en funcionamiento los equipos o sistemas tecnológicos a los que se hace referencia en el párrafo anterior, será acreedor de la sanción que señala el artículo 72 Bis de la presente Ley.

La operación de los equipos o sistemas tecnológicos para la captación o grabación de imágenes o sonidos deberán operar de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de la presente Ley; y

XV.- Las demás obligaciones que éste u otros ordenamientos legales establezcan.

**ARTÍCULO 72 BIS.-** El propietario, encargado o administrador de un Centro de Desarrollo Integral Infantil, que no tenga en funcionamiento los equipos o sistemas tecnológicos a los que se hace referencia el artículo 39, fracción XIV de la presente Ley, se le aplicará una multa equivalente de 30 a 50 unidades de medida y actualización establecidas para un día, de acuerdo a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), del año en que se impone.

**ARTÍCULO 74.-** ...

I a la VI.- ...

VII.- En caso de pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves en una niña o niño, en tanto se deslinde la responsabilidad al Centro de Desarrollo Integral Infantil o personal relacionado con el mismo;

VIII.- Cuando se presenten hechos o actos de violencia física o psicológica en una niña o niño por parte del personal del Centro de Desarrollo Integral Infantil; o

IX.- Cuando no se instalen los equipos o sistemas tecnológicos para la captación o grabación de imágenes o sonidos en los Centro de Desarrollo Integral Infantil. La suspensión durará entre tanto los propietarios o los responsables de dicho centro no haga las instalaciones.

...

## **TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Los Centros de Desarrollo Integral Infantil en el Estado, contarán con un plazo de 90 días naturales para instalar los equipos o sistemas tecnológicos para la captación grabación de imágenes o sonidos a los que hace referencia la fracción XIV del artículo 39 del presente Decreto.

**ARTÍCULO TERCERO.-** Concluido el plazo señalado en el artículo anterior, la autoridad competente deberá realizar visitas de verificación a los Centros del Desarrollo Integral Infantil, a fin de constatar que los mismos cuenten con la instalación de equipos o sistemas tecnológicos para la captación grabación de imágenes o sonidos.

**ARTÍCULO CUARTO.-** El Titular del Ejecutivo del Estado, deberá de actualizar el Reglamento de la Ley 5 de junio que Regula la Prestación de Servicios para la Atención,

Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Sonora, dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente dictamen sea considerado como obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión.

**SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
"CONSTITUYENTES SONORENSES DE 1917"  
Hermosillo, Sonora, a 25 de noviembre de 2020.**

**C. DIP. MIROSLAVA LUJÁN LÓPEZ**

**C. DIP. GRICELDA LORENA SOTO ALMADA**

**C. DIP. YUMIKO YERANIA PALOMAREZ HERRERA**

**C. DIP. FRANCISCO JAVIER DUARTE FLORES**

**C. DIP. ROGELIO MANUEL DÍAZ BROWN RAMSBURGH**

**C. DIP. ORLANDO SALIDO RIVERA**

**C. DIP. MIGUEL ÁNGEL CHAIRA ORTÍZ**

Noviembre 20, 2020. Año 14, No. 1238

**COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y  
ASISTENCIA PÚBLICA.**

**DIPUTADOS INTEGRANTES:**

**MIROSLAVA LUJÁN LÓPEZ**

**GRICELDA LORENA SOTO ALMADA**

**YUMIKO YERANIA PALOMAREZ HERRERA**

**FRANCISCO JAVIER DUARTE FLORES**

**ROGELIO MANUEL DÍAZ BROWN RAMSBURGH**

**ORLANDO SALIDO RIVERA**

**MIGUEL ÁNGEL CHAIRA ORTIZ**

**HONORABLE ASAMBLEA:**

A los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública de esta Sexagésima Segunda Legislatura, nos fue turnado para estudio y dictamen, por la Presidencia de este Poder Legislativo, escrito presentado por la Diputada Marcia Lorena Camarena Moncada, el cual contiene **INICIATIVA DE LEY QUE REGULA LA OPERACIÓN DE ALBERGUES DEL ESTADO DE SONORA.**

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 92, 94, fracciones I y IV, 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen al tenor de la siguiente:

**PARTE EXPOSITIVA:**

La iniciativa objeto del presente dictamen, fue presentada el día 03 de octubre de 2019, con sustento en los siguientes argumentos:

*“Sin lugar a duda, la labor que realizan los albergues situados en nuestro Estado es una labor muy loable y para nada sencilla. Quienes se dedican a ofrecer ayuda a las personas más desprotegidas merecen todo mi respeto y admiración, pero también es una labor que requiere de mucha atención y responsabilidad puesto que se está al cuidado de una persona.*

*En nuestro Estado existen diferentes tipos de albergues siempre enfocados a ayudar a los desprotegidos, tenemos desde albergues para ayudar a inmigrantes, personas de la tercera, y hasta indigentes.*

*Lamentablemente no contamos con un marco jurídico que regule el funcionamiento de ese tipo de establecimientos, no existen reglas claras para el establecimiento de albergues, para la contratación de personal acorde a los servicios que se prestan en los albergues y tampoco hay una delimitación de competencias entre autoridades que se encargue de supervisar el funcionamiento de los albergues.*

*En ese contexto, nace la necesidad de proponer una Ley que regule la operación y funcionamiento de los albergues públicos y privados, razón por la cual vengo a presentar ante este Recinto Legislativo, la presente iniciativa de Ley que Regula la Operación de los Albergues del Estado de Sonora, la cual se compone de 65 artículos distribuidos en los cuatro títulos que a continuación se describen:*

- *Título Primero, denominado Disposiciones Generales.*
- *Título Segundo, denominado De los Derechos de los Residentes y obligaciones de sus Familiares.*
- *Título Tercero, denominado De los Albergues.*
- *Título Cuarto, denominado De la Verificación e Inspección y las Medidas de Seguridad.*

*En el Título Primero, se establece en el Capítulo I, denominado Disposiciones General, que el objeto de la Ley consiste en regular, vigilar y supervisar la operación e inspección de albergues públicos y privados establecidos en el territorio del estado, dedicados al cuidado, vigilancia y, en su caso, la guarda y custodia de personas.*

*Así mismo, se dispone que el titular del Ejecutivo del Estado, por conducto de sus dependencias y entidades, y los gobiernos municipales garantizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias: Que la prestación de servicios sea de calidad, igualdad, con calidez, seguridad y con la protección adecuada para el bienestar y la seguridad de los residentes; que los albergues cuenten con el personal capacitado y suficiente y que el personal de los albergues promueva el ejercicio pleno de los derechos de los residentes.*

*Por otra parte, se establece también, que no se consideran albergues para efectos de la ley: Los que de manera transitoria establezcan las instituciones públicas de conformidad a la legislación de en materia de protección civil y Las guarderías públicas o privadas o centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil estatales o municipales.*

*En el Capítulo II, denominado De las Autoridades, se establecen las atribuciones que tendrán las autoridades encargadas de aplicar la presente Ley, destacando que la Secretaría de Desarrollo Social, ejercerá entre otras, las siguientes atribuciones: Vigilar en el ámbito de su respectiva competencia, el cumplimiento de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias; implementar las acciones necesarias para los residentes reciban atención y servicios de asistencia social; integrar, actualizar permanentemente y publicar en su sitio oficial en internet el Registro Estatal de Albergues, y publicarlo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; Expedir y publicar en su sitio oficial en internet y publicarlo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; el reglamento de operación y las*

*normas técnicas que rijan la expedición del Certificado de funcionamiento que para tal efecto propongan las autoridades a las que se refiere el artículo 8 de la presente ley.*

*En el caso del Instituto de Asistencia Social, órgano cuya naturaleza será la de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, tendrá entre sus atribuciones: Promover, coordinar, apoyar y supervisar la prestación de servicios asistenciales que ofrezcan los albergues; vigilar el cumplimiento de la presente Ley, sus disposiciones reglamentarias y demás normas oficiales aplicables; Dictar la política estatal para la operación de albergues, entre otras más.*

*Por su parte, la Secretaría de Salud, tendrá entre sus atribuciones: Vigilar en el ámbito de su respectiva competencia, el cumplimiento de la presente Ley; expedir o negar la autorización sanitaria; el ejercicio del control sanitario en las instalaciones de los albergues.*

*En el Capítulo III, denominado Del Registro Estatal de Albergues, se establece todo albergue asentado en el territorio del estado deberá inscribirse en el Registro Estatal de Albergues, así mismo se prevé que el Registro Estatal de Albergues deberá contener por lo menos, los siguientes datos: Nombre o razón social del albergue; Domicilio del albergue; Censo de los residentes, que contenga género, edad y, en su caso, situación jurídica, y el seguimiento al proceso familiar y social y Relación del personal que labora en el albergue, incluyendo al titular o administrador, así como su representante legal, especificando la figura jurídica bajo la cual operan.*

*El Capítulo IV, denominado Del Certificado de Funcionamiento, se prevé que el Certificado de funcionamiento será intransferible y tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de expedición, al término de la cual podrá ser renovado a petición expresa del titular o administrador del albergue.*

*Así mismo, se prevé que, para la obtención del Certificado de funcionamiento, se requerirá: Cumplir con los requisitos enunciados en el reglamento de operación y las normas técnicas que al efecto dicte la Secretaría de Desarrollo Social; La autorización sanitaria; Las licencias o permisos municipales que correspondan; Reunir los requisitos en materia de protección civil, entre otros requisitos más.*

*En el Título Segundo, en su capítulo I, denominado De los Derechos de los Residentes, se establecen los derechos que tendrán los residentes en albergues, entre los que se destacan los siguientes: Recibir la prestación de los servicios de manera eficiente y continua; Recibir un trato digno, respetuoso, sin discriminación y libre de violencia durante su estancia; Contar con intimidad personal, que incluye a sus pertenencias individuales; Participar de forma activa en la programación de actividades del albergue y en el desarrollo de las mismas; Recibir alimentación de acuerdo a su edad y condición de salud.*

*En Capítulo II, denominado De los derechos de los Adultos Mayores, se establecen como derechos de las personas adultas mayores entre otros, los siguientes: Ingresar o egresar definitivamente del albergue de manera libre y voluntaria, independientemente de la vigencia del contrato de prestación de servicios celebrados en los términos de esta Ley;*

*Recibir de manera permanente y en términos comprensibles y accesibles, información completa y continua; A que el titular o administrador del albergue reciba sus quejas o reclamos, y que se substancien los mismos.*

*Por su parte, en el Capítulo III, denominado De los Derechos de las Personas Menores de Edad, se establecen como derechos de los residentes de albergues que sean menores de edad, además de los señalados en las leyes General y Estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Civil y los tratados internacionales en los que México sea parte en materia de derechos humanos, los siguientes: A ser reintegradas a su ambiente familiar; A desarrollarse en un medio adecuado y digno; A mantener relaciones personales y contacto directo con sus padres, familiares e integrantes de su familia extendida, a las visitas y convivencia, entre otros más.*

*En el Capítulo IV, denominado De las Obligaciones de los Familiares, se establecen como obligaciones de los familiares y tutores de los residentes las siguientes: Cuidar el estado de salud y emocional del residente; Comunicar al personal del albergue toda la información necesaria para el debido cuidado y estadía del residente; Atender las indicaciones de tipo médico-preventivo que se efectúen por parte del personal autorizado; Acudir al albergue cuando le sea requerida su presencia; Informar al personal del albergue los cambios de números telefónicos, de domicilio o centro de trabajo, el nombre de la persona más cercana y responsable del residente, así como cualquier otro dato necesario para su cuidado, entre otros más.*

*En el Título Tercero, en su Capítulo I, denominado De las Obligaciones de los Albergues, Sección I, se establece que son obligaciones de los albergues los siguientes: Contar con la infraestructura inmobiliaria que para tal efecto determine la autoridad competente; Garantizar que la prestación de sus servicios estarán orientados a prestar sus servicios con calidad y calidez, en un entorno seguro, afectivo y libre de violencia; Brindar a los residentes el cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica; Proporcionar una nutrición equilibrada y que cuente con la periódica certificación de la autoridad sanitaria; Prestar una atención integral y multidisciplinaria que brinde servicio médico integral, primeros auxilios, psicológico, social, jurídico, entre otros; y Fomentar la inclusión de los residentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable; Designar a la persona que fungirá como titular o administrador del albergue; Tramitar su Certificado de funcionamiento, entre otras más.*

*Por su parte en la Sección Segunda denominada De los Albergues para Personas Menores de Edad, se establecen como obligaciones de los albergues para personas menores de edad los siguientes: Velar por el respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos de la persona menor de edad, con base en el interés superior de la niñez; Garantizar a la personas menores de edad, las satisfacción de las necesidades fundamentales de su vida cotidiana que les permitan el adecuado desarrollo integral en los aspectos físico, emocional, intelectual, moral y social; Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, género, o condición física o mental de las personas menores de edad, de manera que permita un entorno afectivo y libre de violencia; Contar con espacios destinados especialmente para cada una de las actividades en las que participen niñas, niños y adolescentes, entre otras más.*

*Finalmente, en la Sección Tercera, denominada De los Albergues para Adultos Mayores, se establecen como obligaciones de dichos Albergues los siguientes: Contribuir a que los residentes tengan una vejez digna, activa, mediante acciones que incluyan geriatría, gerontología, una nutrición adecuada y, en su caso, rehabilitación; Informar permanentemente al residente y, en su caso, a sus familiares, sobre su estado de salud y el tratamiento que requiera; Dar a conocer y entregar por escrito al residente sus familiares el reglamento de operación del albergue; Contar con asesoría jurídica en beneficio de la protección a los derechos de los adultos mayores, entre otras.*

*En el Capítulo II, denominado Del Titular o Administrador del Albergue se establecen que serán obligaciones de los mismos, las siguientes: Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecido en la presente ley y demás disposiciones aplicables para formar parte del Registro Estatal de Albergues; Asegurar que en las instalaciones del albergue, se fije en un lugar visible el Certificado de funcionamiento; Contar con un programa interno de protección civil; Brindar a las autoridades y servidores públicos las facilidades necesarias para puedan realizar visitas de inspección o verificación, permitiéndoles el acceso inmediato, y sin que medie previo aviso, a las instalaciones, expedientes y a los residentes, en cualquier día y hora sin que medie aviso previo, en términos de las disposiciones aplicables; y en su caso, atender y dar puntual seguimiento a las recomendaciones o medidas de seguridad, entre otras más.*

*En el Capítulo III, denominado Del Personal, se establece que el personal que labore en los albergues deberá ser profesionales y debidamente calificados para atender a los residentes de acuerdo a sus condiciones y necesidades personales, así como al nivel de cuidado y servicios prestados. En el caso del personal que ejerza profesiones en el área de trabajo social y psicología o carreras afines, que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e informes psicosociales, deberán cumplir con los requisitos siguientes: Contar con título en trabajo social, psicología o carreras afines, y con cédula para el ejercicio profesional; Contar con experiencia acreditable en temas de desarrollo de la niñez y de la adolescencia, la familia, y el adulto mayor, según sea el caso; Contar con experiencia laboral acreditable mínima de dos años, en trabajo social, psicología, o en la atención de temas de desarrollo de la niñez y de la adolescencia, la familia, y el adulto mayor, según sea el caso, entre otros requisitos más.*

*En el Capítulo IV, denominado De la Prestación del Servicio, establece que la prestación de los servicios previstos en la ley se regirá mediante la celebración de un contrato de prestación de servicios, salvo que medie orden de autoridad competente. Así mismo se establece que en el contrato de prestación de servicios se establecerá cuando menos lo siguiente: El grado de dependencia del residente; El tipo de servicios y cuidado requeridos por el residente; La forma y términos en que el residente podrá egresar transitoriamente del albergue, entre otros datos más.*

*Por su parte, el Capítulo V, denominado De la Admisión de los Residentes, se estipula que la admisión de una persona menor de edad en algún albergue será mediante derivación de la autoridad correspondiente, o en su caso, se atenderá lo dispuesto por el Código Civil del*

*Estado de Sonora. Para la admisión de un adulto mayor en algún albergue deberá mediar solicitud voluntaria, libre y expresa; o en su caso, del tutor declarado por autoridad judicial. En el Título IV, en el Capítulo I, denominado de las Disposiciones Generales, se establece que lo no previsto en la Ley para efectos de los actos de verificación e inspección y las medidas de seguridad se aplicará supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora.*

*Por su parte, en el Capítulo II, denominado De la Verificación e Inspección, se establece que las visitas de verificación e inspección tendrán los siguientes objetivos: Verificar el cumplimiento de los requisitos señalados por esta Ley y demás ordenamientos aplicables por parte de los albergues; Informar a la autoridad competente de la detección oportuna de cualquier riesgo para la integridad física o psicológica, o que impida el ejercicio de los derechos tutelados por esta ley para los residentes; Iniciar el procedimiento para la cancelación o revocación del Certificado de funcionamiento y en su caso, imponer las medidas de seguridad y las sanciones que determine la Ley y demás disposiciones aplicables.*

*El Capítulo III, denominado de las Medidas de Seguridad, se establece que la autoridad que lleve a cabo la verificación o inspección, tendrá la facultad para imponer cualquier medida de seguridad que estime conveniente en los albergues cuando advierta situaciones que pudieran poner en riesgo la integridad de los residentes, pudiéndose acompañar las medidas con un recomendación escrita en la que se fije un plazo de hasta treinta días para corregir la causa que le dio origen cuando no se considere grave; Apercebimiento escrito, el cual procederá en caso de que no se atienda la recomendación o medida de seguridad en el plazo establecido, señalándose un término de hasta cinco días para corregir la causa que lo motivó y Clausura total o parcial de actividades en el albergue que se mantendrá hasta en tanto se corrija la situación que le dio origen.*

*El Capítulo IV denominado, De las Infracciones y Sanciones Administrativas, se establece que, para la individualización de las sanciones, las autoridades tomarán en consideración lo siguiente: Los daños que se produzcan o puedan producirse; El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; El beneficio o lucro que implique para el infractor; La gravedad de la infracción; La reincidencia del infractor y La capacidad económica del infractor.*

*Por otra parte, se dispone también que las violaciones a los preceptos de la Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, por parte de los servidores públicos serán sancionados en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.*

*Finalmente, en el Capítulo V, denominado De los Medios de Impugnación, se establece que para la defensa jurídica contra actos o resoluciones que emanen de una autoridad administrativa en el desempeño de sus atribuciones, que los interesados estimen antijurídicos, infundados o faltos de motivación, se estará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora y Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora.*

*En cuanto a las disposiciones transitorias, se establece que la Ley entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora. Así mismo, se dispone que el titular del Poder Ejecutivo expedirá el Reglamento a la presente ley y efectuará las modificaciones regulatorias correspondientes dentro de un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la vigencia de esta Ley.*

*Por otra parte, los Ayuntamientos deberán expedir su regulación municipal dentro de los noventa días naturales contados a partir de la vigencia de esta Ley.”*

Expuesto lo anterior, esta Comisión procede a resolver el fondo de la iniciativa en estudio, para lo cual nos fundamentamos bajo las siguientes:

### **CONSIDERACIONES:**

**PRIMERA.-** Es facultad constitucional y de orden legal de los diputados al Congreso del Estado, iniciar ante este Órgano Legislativo las leyes, decretos o acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito jurisdiccional del Estado, atento lo dispuesto por los artículos 53, fracción III de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora.

**SEGUNDA.-** Conforme al orden jurídico local, es potestad constitucional exclusiva de este Poder Legislativo discutir, aprobar y expedir toda clase de leyes, decretos y acuerdos de observancia y aplicación en el ámbito territorial del Estado, siendo materia de ley toda resolución que afecte a las personas en general, de decreto la que otorgue derechos o imponga obligaciones a personas determinadas, y de acuerdo en los demás casos, según lo dispuesto por el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

Además, es importante señalar que, en la interpretación, reforma o abrogación de leyes, deberán observarse los mismos trámites establecidos para su formación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado de Sonora.

**TERCERA.-** El Poder Legislativo del Estado tiene la atribución de velar por la conservación de los derechos de los ciudadanos y habitantes del Estado y proveer, por cuantos medios estén a su alcance, a su prosperidad general de conformidad con el artículo 64, fracción XXXV de la Constitución Política del Estado de Sonora.

**CUARTA.-** Dentro de los problemas que afectan de manera directa o indirecta a todos los integrantes de cualquier sociedad, se encuentran aquellos que se originan por la existencia de personas que no se encuentran en condiciones de solventar, por sus propios medios, una carencia de carácter personal o familiar que los coloca en estado de necesidad y pone en riesgo su futuro inmediato.

Si bien es verdad que cada persona debe hacerse responsable de las consecuencias que vienen por las decisiones que toma en su vida, también es verdad que cuando los individuos tocan fondo y se encuentran desamparados, en el peor de los casos, terminan deambulando por las calles en busca de medios para sobrevivir, lo que nos obliga a atacar este problema no solo por ser una cuestión de humanidad o de estética urbana, sino porque muchas veces el desamparo lleva a las personas a recurrir a la delincuencia, debido a que se sienten incapaces de subsistir por medio de actividades lícitas, al menos con la mínima dignidad y decoro; siendo éste un riesgo que se incrementa cuando la persona desamparada tiene familiares que mantener.

En ese sentido, no nos queda duda que éste es un problema que no debe dejar de atenderse, razón por la cual, es conveniente que existan instituciones de asistencia, comúnmente denominadas “albergues”, dedicadas a prestar alojamiento y, en algunos casos, alimentación entre otro tipo de apoyos dirigidos a personas en estado de necesidad, ya que cumplen con una importante función social al convertirse en una opción viable para una gran cantidad de individuos que, de otra forma, no podrían cubrir sus necesidades más apremiantes, sobre todo aquellas que pone en riesgo su porvenir o, incluso, su subsistencia y el de sus familiares más vulnerables.

Entre los usuarios de estas instituciones de asistencia podemos encontrar a personas que pertenecen a nuestra misma comunidad, pero que por diversas razones se encuentran en el desamparo, como son las personas desempleadas, los “niños de la calle”, las víctimas de violencia intrafamiliar, los que han caído en las garras de la drogadicción y otras adicciones, los damnificados por un desastre natural y los que han sufrido la pérdida de su patrimonio por cualquier causa; pero también podemos encontrar a personas ajenas a nuestra comunidad, que por diversas razones se vieron obligadas a abandonar su lugar de origen y terminaron en nuestro Estado buscando un mejor lugar donde vivir, siendo este el caso de los trabajadores eventuales, las personas indigentes, los migrantes, los estudiantes foráneos y las personas con familiares enfermos originarios de poblados desprovistos de adecuados servicios médicos.

Generalmente, el común denominador de estas personas es que no cuentan con un hogar en el que puedan vivir digna y decorosamente, y es por ello que tienen la necesidad de contar con un albergue donde puedan tener los medios mínimos de subsistencia mientras procuran mejorar su calidad de vida.

Ciertamente, este tema es de tal importancia que la Organización de las Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 1950, creó la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para ayudar a los millones de europeos desplazados por la Segunda Guerra Mundial, continuando con esta labor hasta nuestros días, brindando protección y asistencia a los refugiados alrededor del mundo, siendo su actividad principal, esforzarse para garantizar que todas las personas tengan derecho a buscar asilo y encontrar un refugio seguro en otro Estado, con la opción de regresar eventualmente a su hogar, integrarse o reasentarse.

Nos queda claro que, en el caso de los refugiados, no se trata de migrantes, sino de personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución, al conflicto, la violencia generalizada, u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público y, en consecuencia, requieren protección internacional. La definición de refugiado se puede encontrar en la Convención de 1951, así

como en el Estatuto del ACNUR y el Pacto Mundial sobre los Refugiados; mientras que, por otra parte, las Naciones Unidas definen al migrante como *“alguien que ha residido en un país extranjero durante más de un año independientemente de las causas de su traslado, voluntario o involuntario, o de los medios utilizados, legales u otros”*.

No obstante, en ambos casos el tema de fondo sigue siendo el mismo, es decir, que la sociedad apoye a todas aquellas personas en estado de desamparo, que vienen de otros lugares, mediante alojamiento y diversos apoyos que les permitan reorganizar su vida y generar condiciones para volver a su lugar de origen o, en su caso, integrarse como miembros útiles de la sociedad que los recibe. Si esto es así para las personas ajenas a nuestra comunidad, con mayor razón lo debe ser para quienes son de aquí.

En ese tenor, debemos considerar la importancia de intervenir en la vida de estos nobles lugares de asistencia social, con el propósito de que realmente sirvan al fin para el que fueron creados, ya que existen historias negativas en torno a que estos establecimientos, en muchas ocasiones, son utilizados por organizaciones de delincuentes aprovechando la laguna legal que existe sobre este tema, así como la falta de interés por parte de la ciudadanía para conocer las condiciones en que operan estos centros, debido a que, en los mismos, se presta apoyo a personas marginadas de la sociedad o, simplemente, porque dichas personas no pertenecen a la misma colectividad.

Al respecto, existen diversos ejemplos ampliamente difundidos por la prensa nacional e internacional, de albergues que se convirtieron en nidos de malhechores por la acción de la delincuencia organizada, como es el caso del albergue “Casitas del Sur” en la Ciudad de México, donde en 2008 estalló un escándalo por la desaparición de menores que supuestamente nutrían una red de tráfico de niños y niñas; o el albergue “La Gran Familia” en Zamora, Michoacán, que al parecer operaba desde 1948, en el que se albergaba en condiciones insalubres a casi 600 personas, desde recién nacidos hasta personas mayores de 40 años, que sufrían abusos físicos, sexuales y psicológicos.

Al respecto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) alzó la voz exigiendo al Gobierno Mexicano la elaboración de un sistema de registro y supervisión de albergues para evitar que casos como los mencionados volvieran a suceder, siendo ese precisamente el propósito de la iniciativa sometida al análisis y dictamen por parte de esta Comisión, es decir, la elaboración de un sistema de registro y supervisión de establecimientos de asistencia social, entre otras disposiciones que tienen el propósito de que regular estos lugares.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados que integramos esta Comisión de Desarrollo Social y Asistencia Pública consideramos que la iniciativa en estudio es positiva y debe ser aprobada por el Pleno de este Poder Legislativo, toda vez que con su entrada en vigor contaremos con una nueva normatividad que garantice los servicios asistenciales que prestan los albergues, al regular a todos aquellos establecimientos públicos o privados, que prestan servicios de cuidado, vigilancia y, en su caso, la guarda y custodia de personas, incluyendo a los establecimientos educativos y deportivos que utilizan la figura de seminternado e internado.

En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Sonora, sometemos a consideración del Pleno de esta Soberanía, el siguiente proyecto de:

## **LEY**

### **QUE REGULA LA OPERACIÓN DE ALBERGUES DEL ESTADO DE SONORA**

#### **TÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES**

#### **CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1º.-** La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular, vigilar y supervisar la operación e inspección de albergues públicos y privados establecidos en el territorio del estado, dedicados al cuidado, vigilancia y, en su caso, la guarda y custodia de personas.

**Artículo 2º.-** El Gobierno del Estado, por conducto de sus dependencias y entidades, y los gobiernos municipales garantizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, lo siguiente:

- I. Que la prestación de servicios sea de calidad, igualdad, con calidez, seguridad y con la protección adecuada para el bienestar y la seguridad de los residentes;
- II. Que los albergues cuenten con el personal capacitado y suficiente; y
- III. Que el personal de los albergues promueva el ejercicio pleno de los derechos de los residentes.

**Artículo 3º.-** Se aplicará de manera supletoria lo dispuesto en el Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, Ley de los Adultos Mayores del Estado de Sonora, la Ley de Salud para el Estado de Sonora y la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora.

En la interpretación y aplicación de la presente ley se considerará la mayor protección de los derechos conferidos por la legislación a los residentes.

Para los efectos de esta Ley todos los días y horas son hábiles y los plazos se cuentan en días naturales y de momento a momento.

**Artículo 4º.-** Para efectos de la presente Ley no se considerarán albergues:

- I. Los que de manera transitoria establezcan las instituciones públicas de conformidad a la legislación de en materia de protección civil; y
- II. Las guarderías públicas o privadas o centros de atención, cuidado y desarrollo integral infantil estatales o municipales.

**Artículo 5º.-** Para efectos de esta Ley se entiende por:

- I. Adulto mayor: Las personas que cuentan con sesenta años o más de edad y que se encuentran domiciliadas o de paso en el Estado.;
- II. Albergue: El establecimiento público o privado, que presta servicios de cuidado, vigilancia y, en su caso, la guarda y custodia de personas, independientemente de la unidad de tiempo con que se proporcione; se incluye en éstos los establecimientos con fines educativos y deportivos bajo la figura de seminternado e internado;
- III. Autorización sanitaria: Acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria estatal permite a una persona física o jurídica, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos, con los requisitos y modalidades que determine la Ley de Salud para el Estado de Sonora y demás disposiciones legales aplicables;

IV. Certificado de funcionamiento: Documento público que certifica que la prestación de servicios ofrecidos por los albergues cumple con los requisitos establecidos en la presente Ley;

V. Licencia: Documento expedido por los gobiernos municipales para el funcionamiento del giro de albergue, posterior a la autorización sanitaria, cuando así corresponda;

VI. Personas en condición de vulnerabilidad: Las personas cuyas condiciones físicas, psíquicas, históricas, económicas, sociales o culturales, pudieran ser tomadas como motivos discriminatorios, y ello hace probable la existencia de ataques reiterados a su dignidad y sus derechos humanos, y se encuentren en una situación de mayor desventaja para el ejercicio pleno de sus derechos;

VII. Persona menor de edad: Toda persona menor de dieciocho años de edad;

VIII. Registro Estatal de Albergues: Al registro público de albergues asentados en el Estado.

IX. Residente: La persona que recibe el servicio de cuidado y vigilancia y, en su caso, la guarda y custodia, por parte de los albergues regidos por la presente Ley; y

X. Titular o administrador del albergue: La persona que, en carácter de propietaria, administradora o cualquier otra denominación o figura jurídica, sea la responsable de la administración del albergue; todos los albergues deberán designar administrador.

## **CAPÍTULO II DE LAS AUTORIDADES**

**Artículo 6º.-** La Secretaría de Desarrollo Social tendrá las siguientes atribuciones:

I. Vigilar en el ámbito de su respectiva competencia, el cumplimiento de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias;

II. Implementar las acciones necesarias para los residentes reciban atención y servicios de asistencia social;

III. Integrar, actualizar permanentemente y publicar en su sitio oficial en internet el Registro Estatal de Albergues, y publicarlo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora;

IV. Expedir y publicar en su sitio oficial en internet y publicarlo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; el reglamento de operación y las normas técnicas que rijan la expedición del Certificado de funcionamiento que para tal efecto propongan las autoridades a las que se refiere el artículo 8 de la presente Ley;

V. Elaborar un reglamento de operación modelo para albergues, el cual deberá contener los elementos mínimos para su observancia en cada albergue; los albergues podrán adicionar elementos para su mejor operación interna, sin que las disposiciones puedan ser contrarias a lo previsto en esta Ley y su Reglamento, y en el mismo reglamento de operación modelo; y

VI. Las demás que le establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables.

**Artículo 7º.-** El Instituto de Asistencia Social, órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social, tendrá las siguientes atribuciones:

I. Promover, coordinar, apoyar y supervisar la prestación de servicios asistenciales que ofrezcan los albergues;

II. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley, sus disposiciones reglamentarias y demás normas oficiales aplicables. En caso de que en la verificación o inspección se observen irregularidades, dar aviso a la Secretaría de Desarrollo Social para que imponga al albergue la sanción que corresponda, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento;

III. Dictar la política estatal para la operación de albergues;

IV. Establecer los criterios de inspección y evaluación a los que se sujetarán los albergues;

V. Colaborar en la integración del Registro Estatal de Albergues; y

VI. Las demás que le establezcan otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables.

**Artículo 8º.-** Corresponde a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor y la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora, en sus respectivos ámbitos de competencia, el ejercicio de las siguientes atribuciones:

I. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley, sus disposiciones reglamentarias y demás normas oficiales aplicables.

En caso de que en la verificación o inspección se observen irregularidades, dar aviso a la Secretaría de Desarrollo Social para que imponga al albergue la sanción que corresponda, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su Reglamento;

II. Expedir y, en su caso, revocar el Certificado de funcionamiento, según corresponda en los términos de esta Ley;

III. Evaluar periódicamente la política estatal para la operación de albergues;

IV. Elaborar investigaciones y estadísticas con motivo de la operación de albergues;

V. Llevar a cabo visitas de verificación e inspección a todos los albergues para constatar que se cumpla con el reglamento de operación y demás normatividad aplicable;

VI. Colaborar en la integración del Registro Estatal de Albergues;

VII. Certificar la bitácora en las que los albergues deberán registrar ingresos y egresos, salidas temporales y cualquier eventualidad relativa a los residentes;

VIII. Proponer e impulsar ante la Secretaría de Desarrollo Social, las disposiciones para que expida el reglamento de operación y las normas técnicas que rijan la expedición del Certificado de funcionamiento en sus respectivos ámbitos de competencia;

IX. Tener acceso a los expedientes, entrevistar a los residentes para verificar su condición física e identidad, la condición y acceso al ejercicio de sus derechos humanos, impulsar el registro de nacimiento, en su caso; y promover la reinserción del residente y su reunificación familiar, cuando sea posible, escuchando en todo momento al residente y velando por su interés superior;

X.- Proporcionar a los residentes los servicios de asistencia y orientación jurídica;

XI. Proporcionar asistencia y orientación jurídica a los adultos mayores en casos relacionados con su abandono, patrimonio y testamento;

XII. Atender oportunamente las solicitudes que los albergues efectúen para salvaguardar los derechos de las personas que se encuentran a su cuidado;

XII. Conocer de aquellos casos de residentes en que se presuma incapacidad y brindarles asistencia para salvaguardar sus derechos;

XIV. Aplicar el procedimiento administrativo de sanción conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora; y

XV. Las demás que le establezcan otras disposiciones de ley y regulatorias aplicables.

En caso de que en la verificación o inspección se observen irregularidades, la Procuraduría correspondiente dará aviso a la Secretaría de Desarrollo Social para que imponga al albergue la sanción que corresponda, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y su reglamento, y ante cualquier otra autoridad para que proceda conforme el ámbito de su competencia.

Una vez que cualquier autoridad competente reciba comunicación sobre las condiciones de albergues o de sus residentes, las mismas deberán de abrir expediente e iniciar el procedimiento a que haya lugar.

**Artículo 9º.-** Corresponde a la Secretaría de Salud Pública:

I. Vigilar en el ámbito de su respectiva competencia, el cumplimiento de la presente Ley;

II. Expedir o negar la autorización sanitaria;

III. El ejercicio del control sanitario en las instalaciones de los albergues; y

IV. Las demás que le establezcan otras disposiciones legales, reglamentarias y normas oficiales aplicables.

**Artículo 10.-** Corresponde a los municipios, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de las atribuciones siguientes:

I. Expedir la reglamentación municipal de conformidad con lo establecido en la presente ley;

II. Vigilar y supervisar el cumplimiento de la presente Ley;

III. Coadyuvar en la integración y operación del Registro Estatal de Albergues;

IV. Verificar en su ámbito de competencia que los albergues en la prestación de los servicios cumplan con los estándares mínimos de calidad y seguridad y las normas técnicas expedidos por autoridad competente;

V. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de control sanitario y protección civil que correspondan;

VI. Expedir y revocar las licencias o permisos municipales de funcionamiento a los albergues;

VII. Imponer sanciones; y

VIII. Las demás que le establezca esta Ley y otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables.

**Artículo 11.-** Corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los términos de esta ley y su legislación aplicable, realizar visitas periódicas a los albergues, con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias, así como el irrestricto respeto a los derechos humanos de los residentes.

**Artículo 12.-** Las autoridades del Gobierno del Estado, por conducto de sus dependencias y entidades, y los gobiernos municipales, en el ámbito de su competencia, podrán suscribir convenios o acuerdos de coordinación con la finalidad de coadyuvar con la aplicación y ejecución de la presente Ley.

### **CAPÍTULO III**

#### **DEL REGISTRO ESTATAL DE ALBERGUES**

**Artículo 13.-** Todo albergue asentado en el territorio del estado deberá inscribirse en el Registro Estatal de Albergues.

Las autoridades competentes para emitir las autorizaciones o, en su caso licencias, a las que se refiere esta Ley, se coordinarán para la debida inscripción en el Registro Estatal de Albergues.

La Procuraduría en materia de Protección de niñas, niños, adolescentes y la familia, deberá coordinarse con las autoridades del orden federal para efectos del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, conforme lo previsto en la legislación de la materia.

**Artículo 14.-** El Registro Estatal de Albergues deberá contener por lo menos, los datos siguientes:

I. Nombre o razón social del albergue;

II. Domicilio del albergue;

III. Censo de los residentes, que contenga género, edad y, en su caso, situación jurídica, y el seguimiento al proceso familiar y social; y

IV. Relación del personal que labora en el albergue, incluyendo al titular o administrador, así como su representante legal, especificando la figura jurídica bajo la cual operan.

**Artículo 15.-** La pérdida de la inscripción en el Registro Estatal de Albergues procederá en los siguientes casos:

I. Cuando habiendo transcurrido más de seis meses de revocado el Certificado de funcionamiento, persistan en el albergue las causas que dieron origen a la revocación;

II. Cuando a juicio de la autoridad existan causas graves que pongan en peligro la vida o la integridad física y psicológica de los residentes; y

III. Por la petición expresa del titular o administrador del albergue.

**Artículo 16.-** La pérdida del registro producirá la revocación de las diversas autorizaciones y licencia de funcionamiento.

#### **CAPÍTULO IV DEL CERTIFICADO DE FUNCIONAMIENTO**

**Artículo 17.-** El Certificado de funcionamiento será intransferible y tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de expedición, al término de la cual podrá ser renovado a petición expresa del titular o administrador del albergue.

**Artículo 18.-** Para la obtención del Certificado de funcionamiento, se requerirá:

I. Cumplir con los requisitos enunciados en el reglamento de operación y las normas técnicas que al efecto dicte la Secretaría de Desarrollo Social;

II. La autorización sanitaria;

III. Las licencias o permisos municipales que correspondan;

IV. Reunir los requisitos en materia de protección civil;

V. Contar con lo siguiente:

a) Con servicios indispensables para proporcionar comodidad, seguridad e higiene a los residentes durante su estancia;

b) Con espacios físicos propios para cada nivel de atención, así como espacios destinados al alojamiento, alimentación, aseo personal y, en su caso, atención médica;

c) Con un equipo multidisciplinario básico de personal apto y suficiente que preste a los residentes servicios médicos integrales, primeros auxilios, psicológico, social, jurídico, entre otros; y

d) Contar con instalaciones propias para el acceso universal de los residentes y sus familiares; y

VI. Los demás requisitos que establezcan las leyes y disposiciones reglamentarias aplicables.

**Artículo 19.-** Corresponderá la cancelación del Certificado de funcionamiento de albergue cuando de la práctica de verificación o inspección se desprenda lo siguiente:

I. Se deje de cumplir con las condiciones mínimas requeridas para la obtención del Certificado de funcionamiento;

II. Se suspenda la prestación de servicios sin previo aviso a la autoridad competente en materia de protección de niñas, niños, adolescentes y la familia, o Defensa al Adulto Mayor, según corresponda, en un plazo mayor a treinta días naturales; o

III. Por cambio de domicilio del albergue.

En caso de que se presente cualquiera de los supuestos establecidos en el presente artículo, se apercibirá al titular o administrador del albergue y se le fijará un plazo según la naturaleza del acto, para que subsane las irregularidades detectadas.

Una vez transcurrido el plazo, la autoridad competente remitirá las constancias a la Secretaría de Desarrollo Social para que proceda conforme a derecho.

**Artículo 20.-** La falta del certificado de funcionamiento dará lugar a la clausura definitiva del albergue.

**Artículo 21.-** En caso de que el albergue no subsane las irregularidades detectadas en un plazo previsto en el artículo 19 de esta Ley, dará lugar a la revocación del Certificado de funcionamiento.

## TÍTULO SEGUNDO

## **DE LOS DERECHOS DE LOS RESIDENTES Y OBLIGACIONES DE SUS FAMILIARES**

### **CAPÍTULO I DE LOS DERECHOS DE LOS RESIDENTES**

**Artículo 22.-** Además de los derechos reconocidos por la legislación del estado, los residentes tienen derecho a:

- I. Recibir la prestación de los servicios de manera eficiente y continua;
- II. Recibir un trato digno, respetuoso, sin discriminación y libre de violencia durante su estancia;
- III. Contar con intimidad personal, que incluye a sus pertenencias individuales;
- IV. Participar de forma activa en la programación de actividades del albergue y en el desarrollo de las mismas;
- V. Recibir alimentación de acuerdo a su edad y condición de salud;
- VI. Reunirse y convivir con sus familiares y personas que autoricé, así como al régimen de visitas; y
- VII. Los demás que le establezca, la presente Ley, otros ordenamientos legales aplicables, y el reglamento de operación del albergue.

**Artículo 23.-** Las autoridades y los albergues deberán garantizar que los residentes con discapacidad permanezcan en dichos albergues por el tiempo mínimo necesario bajo los principios de unidad y reunificación familiar; en caso de niñas y niños abandonados, serán preferentes las medidas de acogimiento familiar, atendiendo el interés superior de la niñez; y atenderán lo que al efecto prevé la legislación para la Inclusión y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.

En caso de albergues que tengan bajo su cuidado a personas migrantes mutiladas durante su tránsito por Sonora, deberán garantizar su adecuada recuperación y rehabilitación básica, en coordinación con las autoridades correspondientes.

### **CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS DE LOS ADULTOS MAYORES**

**Artículo 24.-** Los adultos mayores además de los derechos señalados en la Ley de los Adultos Mayores del Estado de Sonora, tendrán los siguientes:

- I. Ingresar o egresar definitivamente del albergue de manera libre y voluntaria, independientemente de la vigencia del contrato de prestación de servicios celebrados en los términos de esta Ley;

- II. Recibir de manera permanente y en términos comprensibles y accesibles, información completa y continua;
- III. A que el titular o administrador del albergue reciba sus quejas o reclamos, y que se substancien los mismos;
- IV. Ser informado sobre las dependencias y entidades a las que podría acudir en caso de que se vea afectado en sus derechos;
- V. Recibir una copia del reglamento de operación del albergue;
- VI. A participar de manera libre e informada en las decisiones que afectan a su salud; y
- VII. Los demás que le establezca la presente Ley y otros ordenamientos legales aplicables, y el reglamento de operación del albergue.

### **CAPÍTULO III** **DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD**

**Artículo 25.-** Además de lo señalado en las leyes General y Estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Civil y los tratados internacionales en los que México sea parte en materia de derechos humanos, las personas menores de edad residentes tienen derecho a:

- I. A ser reintegradas a su ambiente familiar;
- II. A desarrollarse en un medio adecuado y digno;
- III. A mantener relaciones personales y contacto directo con sus padres, familiares e integrantes de su familia extendida, a las visitas y convivencia;
- IV. A salidas autorizadas, bajo estricta vigilancia y cuidado del responsable del albergue;
- V. A recibir información clara, accesible, adecuada y apropiada para su edad, con relación al estado que guarda en el albergue;
- VI. A participar de manera informada en las decisiones que afectan a su salud;
- VII. A ser respetado en su integridad física, psicológica y moral;
- VIII. A no ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, malos tratos o explotación;
- IX. A recibir asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva;

X. A tener acceso a información sobre la situación de los miembros de su familia si no mantiene contacto con ellos;

XI. A recibir atención especializada según su condición;

XII. A no ser trasladado a otro albergue, salvo que se justifique el extremo de la medida;

XIII. A disfrutar del descanso, recreación, juego, esparcimiento y actividades que favorezcan su desarrollo integral; y

XIV. Los demás que le establezca la presente Ley y otros ordenamientos legales aplicables, y el reglamento de operación del albergue.

**Artículo 26.-** Las niñas, los niños y adolescentes que se encuentran sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos, tienen derecho a que su estancia en el albergue sea temporal y por el menor tiempo posible.

Para efectos de lo anterior, las autoridades correspondientes, en coordinación con los albergues, atendiendo el interés superior de la niñez, de conformidad con los principios de necesidad e idoneidad, de excepcionalidad y temporalidad; promoverán la reintegración de la persona menor de edad a la guarda y custodia de sus padres o ambiente familiar, una vez que se hayan resuelto o desaparecido las causas que originaron la separación.

**Artículo 27.-** Cuando cualquier albergue reciba a cualquier persona sin que medie orden judicial ni contrato por escrito, se presume que quien lo recibe asume la obligación de prestarle cuidado y vigilancia temporal.

**Artículo 28.-** De conformidad con el principio de unidad familiar se mantendrá juntos a los hermanos menores de edad. Sólo un Juez podrá decretar la separación de éstos cuando exista impedimento grave para su convivencia.

**Artículo 29.-** Queda prohibido a los albergues mover o cambiar a cualquier residente o enviarlo a un sitio distinto al de su custodia y vigilancia; sólo podrá realizarse mediante autorización de la autoridad competente que justifique mediante acuerdo fundado y motivado el extremo de la medida, atendiendo el interés de las personas menores de edad, o los derechos de las personas adultas mayores y con discapacidad, y escuchando previamente al residente.

#### **CAPÍTULO IV DE LAS OBLIGACIONES DE LOS FAMILIARES**

**Artículo 30.-** Son obligaciones de los familiares y del tutor de los residentes, además de las establecidas por el Código Civil y la legislación aplicable, las siguientes:

I. Cuidar el estado de salud y emocional del residente;

II. Comunicar al personal del albergue toda la información necesaria para el debido cuidado y estadía del residente;

III. Atender las indicaciones de tipo médico-preventivo que se efectúen por parte del personal autorizado;

IV. Acudir al albergue cuando le sea requerida su presencia;

V. Informar al personal del albergue los cambios de números telefónicos, de domicilio o centro de trabajo, el nombre de la persona más cercana y responsable del residente, así como cualquier otro dato necesario para su cuidado;

VI. Ingresar al residente con sus artículos de uso personal en la cantidad y con las características que le señale el personal del albergue;

VII. Visitar y convivir con el residente; con la frecuencia autorizada por el mismo residente, o sus legítimos representantes, y acordada con el albergue;

VIII. Acudir y participar con regularidad en los convivios que por distintos motivos organice el albergue; y

IX. Las demás que establezcan el reglamento de operación del albergue.

**Artículo 31.-** El hecho de que los residentes reciban el cuidado y la atención que requieren por parte de terceras personas, de ninguna manera libera a los familiares de los derechos y de las obligaciones que la legislación en las distintas materias les impone.

## **TITULO TERCERO DE LOS ALBERGUES**

### **CAPÍTULO I DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ALBERGUES**

#### **SECCIÓN PRIMERA DE LAS OBLIGACIONES**

**Artículo 32.-** Son obligaciones de los albergues, las siguientes:

I. Contar con la infraestructura inmobiliaria que cumpla con lo siguiente:

a) Dimensiones físicas adecuadas al servicio que se proporciona;

b) Diseño y accesibilidad universal de los residentes y sus familiares; y

c) Medidas de salubridad e higiene, de seguridad y protección civil en términos de la legislación aplicable;

II. Garantizar que la prestación de sus servicios estará orientados a lo siguiente:

a) Prestar sus servicios con calidad y calidez, en un entorno seguro, afectivo y libre de violencia;

b) Brindar a los residentes el cuidado y protección contra actos u omisiones que puedan afectar su integridad física o psicológica;

c) Proporcionar una nutrición equilibrada y que cuente con la periódica certificación de la autoridad sanitaria;

d) Prestar una atención integral y multidisciplinaria que brinde servicio médico integral, primeros auxilios, psicológico, social, jurídico, entre otros; y

e) Fomentar la inclusión de los residentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable;

III. Designar a la persona que fungirá como titular o administrador del albergue;

IV. Tramitar su Certificado de funcionamiento;

V. Garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas que se encuentran a su cuidado, vigilancia y, en su caso, guarda y custodia;

VI. Coadyuvar con las autoridades correspondientes para promover la integración social y familiar de los residentes;

VII. Brindar a los residentes un trato con respeto a su dignidad, intimidad personal y a sus derechos, garantizando en todo momento su integridad física, sexual y psicológica.

VIII. Desarrollar programas de educación y esparcimiento de acuerdo a las necesidades particulares de las residentes orientadas a lograr un desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social, que favorezcan su desarrollo integral, así como la comprensión y el ejercicio de sus derechos;

IX. Brindar a los residentes, una atención física y psicológica adecuada;

X. Coadyuvar en la medida de sus posibilidades en la prestación de servicios de asistencia social a las personas en condición de vulnerabilidad;

XI. Informar a las autoridades correspondientes sobre la condición vulnerabilidad de los residentes a su cuidado;

XII. Promover acciones orientadas a la preservación de las visitas y convivencia, mantener la integración familiar, y la participación e integración social de los residentes.

Para efectos de lo anterior, deberán promover actividades de convivencia con los residentes y familiares, las cuales no podrán ser impedidas o condicionadas salvo los casos previstos por las leyes correspondientes;

XIII. Realizar una evaluación médica de los residentes al momento de su ingreso; y llevar controles médicos periódicos de los residentes;

XIV. Elaborar y mantener actualizado el expediente de cada residente;

XV. Expedir su reglamento de operación en los términos previstos por esta Ley, y publicarlo en sitios visibles del albergue, tanto al interior como al exterior del mismo; deberá contener cuando menos, lo siguiente:

- a) Ajustarse al reglamento de operación modelo;
- b) La forma y términos en que habrán de prestarse los servicios a los residentes;
- c) Los horarios a que se sujetará la prestación de servicios;
- d) Las reglas necesarias para la sana convivencia; y
- e) Los demás requisitos que señale la legislación aplicable;

Se tendrán por no puestas las disposiciones que afecten los derechos humanos y sean contrarios a lo previsto en esta Ley y su Reglamento, y al reglamento de operación modelo;

XVI. Publicar en sitios visibles del albergue, tanto al interior como al exterior del mismo, el catálogo de derechos de los residentes, así como las cuotas o contraprestación por la prestación del servicio;

XVII. Denunciar a las autoridades competentes los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos y sean cometidos en contra de los residentes;

XVIII. Prestar sus servicios al número de residentes que les permita la capacidad de sus instalaciones;

XIX. No derivar en terceras personas, el cuidado, vigilancia, o en su caso, la guarda y custodia de los residentes;

XX. Llevar registro inmediato en la bitácora, todos los ingresos y egresos, salidas temporales, registro de visitantes, y cualquier eventualidad relativa a los residentes;

XXI. Designar al personal suficiente que garantice que siempre esté en el albergue para que las autoridades y servidores públicos puedan dirigirse para realizar visitas de inspección o verificación, permitiéndoles el acceso inmediato, y sin que medie previo aviso, a las instalaciones, expedientes y a los residentes; y

XXII. Las demás obligaciones que éste u otros ordenamientos legales establezcan.

Para efectos de lo establecido en el presente artículo, los titulares o administradores de los albergues y su personal, se abstendrán de realizar actividades que afecten la integridad física y psicológica de los residentes. Asimismo, los titulares o administradores evitarán que el personal que realice actividades diversas al cuidado, vigilancia, y en su caso, la guarda y custodia de los residentes.

**Artículo 33.-** Los albergues deberán elaborar y mantener actualizado un expediente por residente, en cual constarán todas las circunstancias personales del residente y que sean relativas a su estancia y los servicios que recibirá por parte del albergue.

El expediente al que se refiere el presente artículo deberá estar actualizado de manera permanente, y establecerá la modalidad de su ingreso o admisión, historial clínico y egresos, en los términos del Reglamento de la presente Ley.

En el caso de residentes menores de edad, el expediente deberá contener información suficiente que permita que su situación sea revisada y valorada de manera particular, así como determinar procedimientos de ingreso y egreso con el apoyo de las autoridades competentes que faciliten su reincorporación al ambiente familiar o social.

**Artículo 34.-** Los albergues deberán llevar un padrón o base de datos de sus residentes, el cual deberá ser actualizado permanentemente, y contendrá como mínimo lo siguiente:

- I. Nombre, nacionalidad, datos de identificación, registro y estado de salud del residente;
- II. Fotografía del residente;
- III. Motivo y fecha de ingreso;
- IV. Nombre y domicilio de la persona que acompaña y, en su caso, representa al residente;
- V. Nombre y domicilio de las personas que ejerzan la guarda y custodia, tutela o, en su caso, la patria potestad;
- VI. Los datos escolares del residente, en su caso; y
- VII. El estado de la situación jurídica del residente.

Los albergues deberán cumplir con las disposiciones legales en materia de datos personales.

El padrón a que se refiere el presente artículo será remitido de manera semestral a la Secretaría de Desarrollo social, y a las entidades previstas en esta legislación y su Reglamento, para lo cual podrá hacer uso de los medios electrónicos disponibles.

## **SECCIÓN SEGUNDA DE LOS ALBERGUES PARA PERSONAS MENORES DE EDAD**

**Artículo 35.-** Son obligaciones de los albergues para personas menores de edad, también denominados centros de asistencia social, además de lo señalado en la sección primera del presente Capítulo, las siguientes:

I. Velar por el respeto y ejercicio pleno de los derechos humanos de la persona menor de edad, con base en el interés superior de la niñez;

II. Garantizar a las personas menores de edad, la satisfacción de las necesidades fundamentales de su vida cotidiana que les permitan el adecuado desarrollo integral en los aspectos físico, emocional, intelectual, moral y social;

III. Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, género, o condición física o mental de las personas menores de edad, de manera que permita un entorno afectivo y libre de violencia;

IV. Contar con espacios destinados especialmente para cada una de las actividades en las que participen niñas, niños y adolescentes;

V. Privilegiar en todo momento, el derecho de las personas menores de edad a vivir en familia;

VI. Promover, preferentemente, el restablecimiento, integración y la preservación de los vínculos familiares de las personas menores de edad, tomando en cuenta que éstos no resulten en su perjuicio;

VII. Asegurar el contacto personas menores de edad que se encuentran en los albergues con su familia y comunidad;

VIII. No utilizar ningún tipo de métodos y/o reglamentos que impliquen o autoricen forma alguna de maltrato físico o psicológico, el aislamiento, tratos crueles, inhumanos, degradantes o estigmatizante, la restricción o denegación del contacto con familiares, o cualquier otra medida de ponga en peligro su integridad, salud física o mental; o de restricción de derechos que no haya sido ordenada por determinación judicial;

IX. Alojar y agrupar de acuerdo a su edad y sexo a niñas, niños y adolescentes en las áreas de dormitorios, sin que por ningún motivo éstos puedan ser compartidos por adultos, salvo que necesiten ser asistidos por algún adulto;

X. Coordinarse con las autoridades correspondientes, a efecto de llevar a cabo acciones y programas efectivos para el cumplimiento de sus objetivos;

XI. Colaborar con las autoridades señaladas en la presente Ley, y proporcionar todas las facilidades para el cumplimiento de sus atribuciones;

XII. Llevar a cabo revisiones periódicas de la situación de sus residentes, de su familia y de la medida especial de protección por la cual ingresó al albergue;

XIII. Contar con el reglamento de operación, en los términos de esta Ley, y aprobado por el Sistema Nacional DIF;

XIV. Dar a conocer al residente y entregarle por escrito el reglamento de operación del albergue;

XV. Brindar el cuidado y vigilancia a los residentes de manera permanente quedando prohibida la figura de albergue abierto;

XVI. Contar con el reglamento de operación, en los términos de esta Ley, y aprobado por el Sistema Nacional DIF;

XVII. Publicar en un lugar visible la constancia de registro de incorporación al Registro Nacional de Centros de Asistencia Social;

Remitir semestralmente el padrón o base de datos de sus residentes con la información de la situación jurídica en la que se encuentren, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora; y

XIX. Las demás obligaciones que éste u otros ordenamientos legales establezcan.

### **SECCIÓN TERCERA DE LOS ALBERGUES PARA ADULTOS MAYORES**

**Artículo 36.-** Son obligaciones de los albergues para adultos mayores, además de lo señalado en la sección primera del presente Capítulo, las siguientes:

I. Contribuir a que los residentes tengan una vejez digna, activa, mediante acciones que incluyan geriatría, gerontología, una nutrición adecuada y, en su caso, rehabilitación;

II. Informar permanentemente al residente y, en su caso, a sus familiares, sobre su estado de salud y el tratamiento que requiera;

III. Dar a conocer y entregar por escrito al residente sus familiares el reglamento de operación del albergue;

IV. Contar con asesoría jurídica en beneficio de la protección a los derechos de los adultos mayores; y

V. Las demás obligaciones que éste u otros ordenamientos legales establezcan.

### **CAPÍTULO II DEL TITULAR O ADMINISTRADOR DEL ALBERGUE**

**Artículo 37.-** Son obligaciones del titular del albergue o administrador, las siguientes:

I. Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecido en la presente ley y demás disposiciones aplicables para formar parte del Registro Estatal de Albergues;

II. Asegurar que en las instalaciones del albergue, se fije en un lugar visible el Certificado de funcionamiento;

III. Contar con un programa interno de protección civil;

IV. Brindar a las autoridades y servidores públicos las facilidades necesarias para puedan realizar visitas de inspección o verificación, permitiéndoles el acceso inmediato, y sin que medie previo aviso, a las instalaciones, expedientes y a los residentes, en cualquier día y hora sin que medie aviso previo, en términos de las disposiciones aplicables; y en su caso, atender y dar puntual seguimiento a las recomendaciones o medidas de seguridad;

V. Informar oportunamente a la autoridad competente, cuando el ingreso de residente menor de edad, corresponda a una situación distinta de la derivación por parte de una autoridad o tenga conocimiento de que pelagra su integridad física estando bajo su custodia, a fin de iniciar los procedimientos de protección especial de forma oportuna, identificar la mejor solución para el residente y, en su caso, evitar su permanencia en el albergue, dando su carácter de último recurso y excepcional;

VI. Realizar acciones específicas para fortalecer la profesionalización del personal del albergue; y

VII. Las demás obligaciones establecidas en la presente ley y demás disposiciones aplicables.

### **CAPÍTULO III DEL PERSONAL**

**Artículo 38.-** El personal con que cuenten los albergues deberá ser profesional y debidamente calificado, según corresponda, para atender a los residentes de acuerdo a sus condiciones y necesidades personales, así como al nivel de cuidado y servicios prestados.

En el caso del personal que ejerza profesiones en el área de trabajo social y psicología o carreras afines, que realicen estudios socioeconómicos, psicológicos e informes psicosociales, deberán cumplir con los requisitos siguientes:

I. Contar con título en trabajo social, psicología o carreras afines, y con cédula para el ejercicio profesional;

II. Contar con experiencia acreditable en temas de desarrollo de la niñez y de la adolescencia, la familia, y el adulto mayor, según sea el caso;

III. Contar con experiencia laboral acreditable mínima de dos años, en trabajo social, psicología, o en la atención de temas de desarrollo de la niñez y de la adolescencia, la familia, y el adulto mayor, según sea el caso;

IV. No haber sido condenado por delitos dolosos; y

V. Presentar constancia por parte del albergue privado en la que indique que el personal profesional son personas empleadas asalariadas con remuneración mensual fija.

**Artículo 39.-** Los albergues deberán contar con al menos, el siguiente personal:

I. El titular o administrador;

II. Especializado en proporcionar atención a actividades de estimulación, formación, promoción y autocuidado de la salud; atención médica y actividades de orientación social y de promoción de la cultura de protección civil; y

Los albergues para personas menores de edad, deberán contar con por lo menos, una persona para el cuidado y atención de cuatro niños o niñas menores de un año; y una persona para el cuidado y atención por cada ocho niños o niñas mayores de esa edad.

**Artículo 40.-** El titular del albergue o administrador deberá designar y garantizar el personal suficiente para que las autoridades y servidores públicos puedan dirigirse para realizar visitas de inspección o verificación.

**Artículo 41.-** El personal de los albergues deberá brindar sus servicios a toda persona, sin distinción alguna, con respeto, cuidado, prontitud, calidad y calidez humana.

**Artículo 42.-** Es obligación del personal de los albergues guardar debida reserva y discreción sobre los asuntos y condiciones personales, estado físico y mental de los residentes.

**Artículo 43.-** Los albergues podrán recibir la ayuda económica y afecto personal de ciertas y determinadas personas que, con fines altruistas, se hagan cargo de cada uno de los residentes en lo individual, pudiéndoles permitir convivir con ellos en épocas y circunstancias precisas, sin que esto implique el traslado de las niñas, niños y adolescentes fuera de las instituciones ni ejercer guarda y custodia personal ni cuidado y vigilancia sobre ellos. Los titulares o administradores del albergue supervisarán esa convivencia y reguardarán la integridad de los residentes sobre quienes la ejerzan.

Las personas que con fines altruistas a que se refiere el párrafo anterior, se acreditarán ante la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sonora.

**Artículo 44.-** Los albergues serán responsables directos por los actos y descuidos que cometan los empleados, voluntarios y prestadores de servicio social en perjuicio de los residentes.

**Artículo 45.-** El personal que labore en los albergues estará obligado a participar en los programas de formación, actualización, capacitación y certificación, así como de protección civil que establezcan las autoridades competentes.

**Artículo 46.-** El Reglamento de la presente Ley, establecerá el personal técnico mínimo con que deberá contar el albergue de acuerdo a su nivel de atención.

#### **CAPÍTULO IV DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

**Artículo 47.-** La prestación de los servicios previstos en esta ley se regirá mediante la celebración de un contrato de prestación de servicios, salvo que medie orden de autoridad competente.

**Artículo 48.-** En el contrato de prestación de servicios se establecerá cuando menos lo siguiente:

- I. El grado de dependencia del residente;
- II. El tipo de servicios y cuidado requeridos por el residente;
- III. La forma y términos en que el residente podrá egresar transitoriamente del albergue;
- IV. Tratándose de albergues privados, el costo que tendrá cada uno de los servicios pactados así como la contraprestación económica o cuota total en su conjunto;
- V. En su caso, la cuota de recuperación o la contraprestación que establezcan los albergues públicos;
- VI. La temporalidad en que regirá el contrato; y
- VII. Los derechos y obligaciones que los contratantes se otorguen de manera recíproca.

En ningún supuesto se podrá retener al residente, o condicionar o limitar su derecho a las visitas y convivencia, por la falta de pago de las cuotas u obligaciones alimentarias.

Los albergues públicos regirán la prestación del servicio mediante los criterios de ingreso y estancia para prestación de los servicios, en los términos de su reglamento de operación y disposiciones administrativas que les apliquen.

#### **CAPÍTULO V DE LA ADMISIÓN DE LOS RESIDENTES**

**Artículo 49.-** La admisión de una persona menor de edad en algún albergue será mediante derivación de la autoridad correspondiente, o en su caso, se atenderá lo dispuesto por el Código Civil del Estado de Sonora.

**Artículo 50.-** Para la admisión de un adulto mayor en algún albergue deberá mediar solicitud voluntaria, libre y expresa; o en su caso, del tutor declarado por autoridad judicial.

## **TÍTULO CUARTO DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN Y LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD**

### **CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 51.-** Lo previsto en el presente Título se regirá en lo conducente conforme a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora.

### **CAPÍTULO II DE LA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN**

**Artículo 52.-** Las distintas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del estado y de los Gobiernos municipales dentro del ámbito de sus respectivas competencias deberán efectuar visitas ordinarias de verificación e inspección a los albergues cuando menos una vez al año. Del mismo modo efectuarán visitas extraordinarias cuantas veces resulte necesario.

**Artículo 53.-** Las visitas de verificación e inspección a que se refiere el presente capítulo tendrán los siguientes objetivos:

- I. Verificar el cumplimiento de los requisitos señalados por esta Ley y demás ordenamientos aplicables por parte de los albergues;
- II. Informar a la autoridad competente de la detección oportuna de cualquier riesgo para la integridad física o psicológica, o que impida el ejercicio de los derechos tutelados por esta ley para los residentes;
- III. Iniciar el procedimiento para la cancelación o revocación del Certificado de funcionamiento; y
- IV. En su caso, imponer las medidas de seguridad y las sanciones que determine la Ley y demás disposiciones aplicables.

**Artículo 54.-** Cuando las visitas de verificación o de inspección arrojen irregularidades diversas a la competencia de la autoridad que inspecciona, deberá dar aviso a la dependencia o entidad de la administración pública estatal o municipal que corresponda.

**Artículo 55.-** Cualquier persona podrá solicitar la intervención de la autoridad correspondiente para reportar cualquier irregularidad o incumplimiento a la normatividad o factor que pueda constituir un riesgo en los albergues.

### **CAPÍTULO III DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD**

**Artículo 56.-** La autoridad que lleve a cabo la verificación o inspección, tendrá la facultad para imponer cualquier medida de seguridad que estime conveniente en los albergues cuando advierta situaciones que pudieran poner en riesgo la integridad de los residentes, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora y sus Municipios.

**Artículo 57.-** Las medidas de seguridad que imponga la autoridad, podrá acompañarse de:

I. Recomendación escrita en la que se fije un plazo de hasta treinta días para corregir la causa que le dio origen cuando no se considere grave;

II. Apercibimiento escrito, el cual procederá en caso de que no se atienda la recomendación o medida de seguridad en el plazo establecido, señalándose un término de hasta cinco días para corregir la causa que lo motivó; y

III. Clausura total o parcial de actividades en el albergue que se mantendrá hasta en tanto se corrija la situación que le dio origen. Cuando a juicio de la autoridad la causa sea grave o lo amerite, esta medida podrá imponerse con independencia de las demás señaladas en este artículo.

**Artículo 58.-** Los plazos a que se refiere el artículo anterior, podrán ampliarse por un término igual, siempre y cuando ello se justifique a partir de la situación específica que originó la medida, exceptuando los casos de gravedad.

#### **CAPÍTULO IV DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS**

**Artículo 59.-** Para la aplicación de las sanciones administrativas establecidas por esta Ley y su Reglamento, las autoridades atenderán lo previsto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora.

**Artículo 60.-** Para la individualización de las sanciones, las autoridades tomarán en consideración:

I. Los daños que se produzcan o puedan producirse;

II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

III. El beneficio o lucro que implique para el infractor;

IV. La gravedad de la infracción;

V. La reincidencia del infractor; y

VI. La capacidad económica del infractor.

**Artículo 61.-** Será motivo de sanción económica, de conformidad con lo dispuesto en regulación aplicable, con multa de doscientas cincuenta veces a mil quinientas veces el valor

diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometer la infracción, los siguientes actos realizados por cualquier albergue:

- I. Impedir total o parcialmente el desarrollo de la visita por parte de los servidores públicos que realicen las visitas de verificación o inspección;
- II. Preparar y ofrecer alimentos en mal estado, inadecuados para la dieta o de poco valor nutrimental para residentes;
- III. Incumplir con las medidas de salud y atención médica en los términos que establezca la normatividad correspondiente;
- IV. El incumplimiento a las obligaciones para los albergues o las que se establecen para el titular o administrador en esta Ley, su Reglamento o las normas técnicas expedidas por autoridad competente;
- V. Incumplir con lo previsto en el reglamento de operación; o
- VI. Poner en riesgo la vida, la integridad física o psicológica de cualquier residente.

**Artículo 62.-** Son causas de clausura temporal las siguientes:

- I. No contar con el personal competente o suficiente para brindar los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral del residente;
- II. No regularizar la situación que dio origen a la imposición de la multa de tal forma que las causas que originaron la misma sigan vigentes;
- III. El incumplimiento de estándares mínimos de calidad y seguridad establecidos por la autoridad competente;
- IV. Generar cualquier circunstancia que signifique riesgo a la vida, la integridad física o psicológica de los residentes;
- V. Reincidir en alguna de las causas que originen las sanciones contenidas en el artículo que antecede siempre que se cometa la misma infracción; o
- VI. No contar con registro ante el Instituto de Asistencia Social en los casos de centros de acogida, casas hogares o albergues para personas menores de edad.

**Artículo 63.-** Son causas de la revocación del Certificado de funcionamiento, así como la cancelación del Registro, las siguientes:

- I. Reincidir en más de dos ocasiones en alguna de las causas que dieron origen a la clausura;

II. Poner en riesgo la vida o integridad física de algún adulto mayor o la pérdida de la vida o la existencia de lesiones graves que sean atribuibles al incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Ley;

III. Cuando sea falsificada o alterada la documentación oficial;

IV. Cuando exista un mal manejo o manipulación, alteración o falsificación de los registros de estancia de los residentes por parte del titular o administrador del albergue;

V. Cuando sea comprobado, por parte de las autoridades competentes, que el titular o administrador del albergue, cometió actos de violencia, maltrato o abuso, pornografía u otras conductas que vayan en detrimento de la salud o integridad física y psicológica de los residentes;

VI. Cuando se registre el incremento en la capacidad del albergue, sin dar previo aviso a las autoridades competentes;

VII. Realizar cualquiera de las acciones que establece el artículo 30 de esta Ley; o

VIII. Cuando no cuente con un registro actualizado de los albergados, así como con la debida información de su situación jurídica y ésta sea del conocimiento de la autoridad competente.

**Artículo 64.-** Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus reglamentos y disposiciones que de ella emanen, por parte de los servidores públicos serán sancionados en los términos de la Ley Estatal de Responsabilidades, sin perjuicio de las penas que correspondan cuando sean constitutivas de delitos.

## **CAPÍTULO V DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN**

**Artículo 65.-** Para la defensa jurídica contra actos o resoluciones que emanen de una autoridad administrativa en el desempeño de sus atribuciones, que los interesados estimen antijurídicos, infundados o faltos de motivación, se estará a lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora y Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sonora.

No procederá la suspensión del acto tratándose de medidas de seguridad, clausura o revocación del Certificado de funcionamiento o licencia, independientemente del recurso administrativo o juicio de nulidad que se interponga en contra del mismo.

## **TRANSITORIOS**

**Artículo Primero.-** La presente Ley entrará en vigor al día siguiente su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora.

**Artículo Segundo.-** El titular del Poder Ejecutivo expedirá el Reglamento a la presente ley y efectuará las modificaciones regulatorias correspondientes dentro de un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la vigencia de esta Ley.

**Artículo Tercero.-** Los Ayuntamientos deberán expedir su regulación municipal dentro de los noventa días naturales contados a partir de la vigencia de esta Ley.

**Artículo Cuarto.-** Los albergues deberán obtener el Certificado de funcionamiento previsto por esta ley dentro de un plazo no mayor a ciento ochenta días naturales contados a partir de la vigencia de esta Ley.

**Artículo Quinto.-** La Secretaría de Hacienda deberá de asignar una partida presupuestal a la Secretaría de Desarrollo Social, para el ejercicio de las facultades que le corresponderán al Instituto de Asistencia Social.

En tal sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 127 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora, se solicita que el presente dictamen sea considerado como obvia resolución y se dispense el trámite de segunda lectura, para que sea discutido y decidido, en su caso, en esta misma sesión.

**SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO  
"CONSTITUYENTES SONORENSES DE 1917"  
Hermosillo, Sonora, a 25 de noviembre de 2020.**

**C. DIP. MIROSLAVA LUJÁN LÓPEZ**

**C. DIP. GRICELDA LORENA SOTO ALMADA**

**C. DIP. YUMIKO YERANIA PALOMAREZ HERRERA**

**C. DIP. FRANCISCO JAVIER DUARTE FLORES**

**C. DIP. ROGELIO MANUEL DÍAZ BROWN RAMSBURGH**

**C. DIP. ORLANDO SALIDO RIVERA**

**C. DIP. MIGUEL ÁNGEL CHAIRA ORTIZ**